

INFORME ESPECIAL El desembarco de empresas argentinas en Venezuela

Tropicalísimo



Fotomontaje Alejandro Elias

Los prejuicios de muchos empresarios locales respecto de Hugo Chávez son abandonados cuando se trata de celebrar millonarios contratos. Ya se cerraron operaciones como el salvataje financiero de SanCor, la asociación Enarsa-Pdvsa o el renacer de Astilleros Río Santiago. Desde pymes hasta los exitosos de siempre, encabezados por Techint, Roggio, Cartellone, Pescarmona, Grobocopatel, Cirigliano y Macri, están en primera fila para concretar negocios en Venezuela.

el Libro

TRABAJO INFANTIL

Teoría y lecciones de la América Latina

Luis Felipe y López Calva (compilador)

Fondo de Cultura Económica



¿El trabajo infantil es un fenómeno que afecta el bienestar de los niños? Y si es así, ¿por qué?

¿Hay alguna relación entre condiciones peligrosas de trabajo y el trabajo infantil? ¿Hay algún efecto positivo en el bienestar de las familias pobres al prohibir el trabajo infantil? Para responder estas preguntas los compiladores de este libro realizan una revisión de las teorías más relevantes y de los hallazgos empíricos que rodean la economía del trabajo infantil. El objetivo es: “proporcionar las pautas para crear políticas efectivas, desacreditar los mitos de la intervención legislativa y las consecuencias negativas del trabajo infantil”.

¿Cuál Es

El grupo estadounidense **Procter and Gamble** (PG) obtuvo la semana pasada 19,2 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios luego de que empleados de la firma de distribución Amway fueron encontrados culpables de haber lanzado, con fines comerciales, rumores sobre los supuestos vínculos entre PG y el satanismo. El caso se remonta a la década del '80, cuando circularon rumores que asimilaban el logo que la firma tenía entonces con Satán. Este representaba a un hombre barbudo con cara de luna creciente, rodeado de 13 estrellas.

RanKing

Top Ten

Multimillonarios, en millones de dólares

1. Bill Gates (Estados Unidos)	56.000
2. Warren Buffet (Estados Unidos)	52.000
3. Carlos Slim (México)	49.000
4. Ingvar Kamprad (Suecia)	33.000
5. Lakshm Mittal (India)	32.000
6. Sheldon Adelson (Estados Unidos)	26.500
7. Bernard Arnault (Francia)	26.000
8. Amancio Ortega (España)	24.000
9. Li Ka-shing (Hong Kong)	23.000
10. David Thomson (Canadá)	22.000

Fuente: Revista Forbes.

EL CHISTE

—¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero mecánico y uno civil?
—El ingeniero mecánico construye armas y el ingeniero civil construye objetivos.

Empresas

SPI –Astilleros– bautizó la “Argentina III”, una barcaza de doble casco para transportar combustible que construyó para el Consorcio Naviero Argentina, en instalaciones del ex Astillero Ministro Manuel Domecq García. SPI –Astilleros–, la empresa de Mar del Plata, ha tenido un papel fundamental en la reactivación de la industria naval y, particularmente, en la construcción de este tipo de embarcaciones para almacenar y transportar hidrocarburos.

44 por ciento de los ciudadanos europeos cree que la vida en sus respectivos países ha empeorado desde el ingreso en la **Unión Europea**, según un sondeo publicado la semana pasada por *The Financial Times*. Por el contrario, tan sólo un 25 por ciento considera que hoy se vive mejor allí que antes de la incorporación a ese bloque.

Cursos & seminarios

La **Alianza Francesa** abre la inscripción para el curso “Francés del turismo”, un programa diseñado para profesionales del turismo que desean aprender a comunicarse en situaciones cotidianas y profesionales. Informes: 4322-0068 o cur-sos@alianzafrancesa.org.ar

la Posta

Las exportaciones de **auto-partes** llegaron el año pasado a 2312 millones de dólares, 9,8 por ciento por encima de las de 2005; en tanto que las importaciones alcanzaron 5638 millones, 28,8 por ciento más que en el período anterior. De esta forma, el saldo comercial negativo subió a 3326 millones de dólares, 46,4 por ciento por sobre 2005. La *consultora IES* estima para este año subas de 28 a 30 por ciento en las importaciones y de 10 al 12 por ciento en las exportaciones.

el Dato

El sector privado está descuidando la gran oportunidad de negocios que representan los 4000 millones de **pobres** que hay en el mundo, afirmó el Banco Mundial, entidad que sabe lo que significa vivir de los pobres. La advertencia está contenida en un informe elaborado por la Corporación Internacional de Finanzas, perteneciente al Banco, donde se exponen datos obtenidos a través de encuestas realizadas en hogares pobres de 110 países. El objetivo –según sus autores– es ayudar a las empresas a pensar más creativamente sobre la posibilidad de nuevos modelos de negocios que cubran las necesidades de mercados desatendidos y al mismo tiempo contribuyan con el desarrollo de los que menos tienen.

EL ACERTIJO

En una bodega hay dos tipos de botellas, grandes y pequeñas. Las grandes contienen doble cantidad de vino que las pequeñas. Disponemos de 12 botellas grandes, 7 llenas y 5 vacías, así como de 12 botellas pequeñas, 7 llenas y 5 vacías. Se desean repartir las 24 botellas entre 3 personas, de modo que cada una reciba el mismo número de botellas y la misma cantidad de vino.

¿Cómo se podrá hacer el reparto?

1ª persona: 3 grandes llenas, 1 pequeña vacía.
2ª persona: 2 g. llenas, 3 p. llenas, 2 g. vacías, 1 pequeña vacía.
3ª persona: 2 g. llenas, 3 p. llenas, 2 g. vacías, 1 pequeña vacía.

Respuesta:

Tropicalísimo

POR CLEDIS CANDELARES I

Los abundantes petrodólares venezolanos, junto a la empatía política de los gobiernos de Néstor Kirchner y Hugo Chávez, arrimaron a muchas empresas argentinas casi a las puertas del paraíso. O, al menos, a la posibilidad de hacer negocios hasta hace poco impensados, como el salvataje financiero de SanCor o el renacer de Astilleros Río Santiago, que construye dos buques petroleros por 58 millones de dólares cada uno. Una prueba de ese creciente vínculo es que en cuatro años se triplicó el superávit comercial a favor de Buenos Aires, que cada vez le vende más y más variados productos a Caracas. Así consiguió en el último año un saldo a su favor superior a los 700 millones de dólares vendiendo desde carne a hardware hospitalario. Argentina también se perfila como una destacada proveedora de tecnología al país caribeño, que utilizará inteligencia local para construir viviendas sociales, desarrollar la industria metalmecánica o para sembrar soja. El plan chavista para reemplazar gradualmente las naftas por el gas natural comprimido e invertir 1850 millones de dólares en la industria del GNC habilitó la formación de empresas mixtas con socios argentinos. Al calor de este maridaje económico, en este extremo del continente se entusiasman desde pymes hasta los exitosos de siempre, listado encabezado por Techint, al que se fueron sumando Roggio, Cartellone, Pescarmona, Grobocopatel, Cirigliano y Macri, entre otros.

Esta favorable perspectiva fue mirando los prejuicios que muchos empresarios locales tienen respecto de la administración chavista. La presunta hostilidad del mandatario venezolano hacia el capital privado no talla cuando se trata de celebrar contratos de servicio, como el cerrado por Gustavo Grobocopatel, que proveerá *know how* para que Venezuela se autoabastezca de soja y otros cereales en cuatro años.

También se archivó la “ideología” cuando la mendocina Impsa consigue colarse en el emprendimiento hidroeléctrico Macagua I y, posiblemente, Macagua II, represas a orillas del río Carolín a las que proveerá turbinas por más de 100 millones de dólares en cada caso. Desde que consiguió el primer contrato, Enrique Pescarmona hasta eludió con esmero cualquier crítica a la política kirchnerista, consciente de que su logro fue favorecido por la gestión del Gobierno. Finalmente, tanto en este caso como en el de Grobocopatel, no se trata de invertir a riesgo bajo las pautas del Palacio Miraflores sino de venderle bienes o servicios.

El otro estímulo que tienen las empresas locales es la posibilidad de hacer buenos negocios con el dinero de ambos estados. Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista argentino, compra para las generadoras fueloil y gasoil a Venezuela, cuyo pago integra un fondo fiduciario administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de aquel país. En los dos últimos años, allí se acumularon poco más de 390 millones de dólares que, en virtud del Convenio Integral de Cooperación firmado el 6 de abril del 2004, deben ser utilizados para la

compra de productos argentinos.

Así Medix pudo lo que nunca: exportar incubadoras por 23 millones de dólares; otros 50 millones fueron capturados por las grúas de Hidroé y 113 se los llevaron los fabricantes de maquinaria agrícola. Una lista de operaciones que también incluyó ganado en pie, los ascensores de Servas o el software provisto por la filial local de Philips, entre otras.

Las operaciones hechas en ese marco tienen algunos alicientes adicionales, como que Venezuela adelanta el 30 por ciento del valor a su proveedor argentino, que por esta vía consigue prefinanciarse. Amén que el Estado venezolano puede reforzar el fideicomiso con recursos propios a voluntad, sin esperar que Argentina le compre más combustible. El presupuesto local para este año contempla unos 230 millones de dólares para la compra de carburante venezolano que nutrirán ese fondo utilizado para comprar productos argentinos. Pero si Chávez tuviera el ánimo de promover las importaciones desde este extremo sur del continente, puede asignar una partida extra en cualquier momento.

El convenio es un marco auspicioso, pero superado por la prolífica relación bilateral. De hecho, no se honró estrictamente la pauta original de usar el fondo para importar productos “agropecuarios y petroenergéticos” argentinos porque, en este último caso, la competencia de los norteamericanos resultó insuperable. Pero sí se vendieron alimentos por fuera de este esquema a la estatal venezolana Coordinadora de Abastecimiento de Servicios Alimentarios. Otra vía alternativa ha sido la singular operación cerrada con SanCor por la cual la cooperativa fundada en Santa Fe repagará con leche en polvo el préstamo de 135 millones de dólares otorgado por aquel país.

La nutrida comitiva empresaria que acompañó en febrero al presidente argentino a Puerto Ordaz se explica por el amplio abanico de negocios que se está desplegando ante las firmas locales, a veces más prometedores que los que pueden en su propia tierra. El del GNC es un caso testigo. Venezuela encaró un ambicioso plan para reconvertir a gas natural comprimido los vehículos particulares y todo el transporte público, incluida la flota oficial, de un total superior a los 600 mil vehículos. La meta es llegar en el 2009 a propulsar con GNC 312 mil unidades, número que podría duplicarse un poco después. De esa manera, los venezolanos irían liberando el petróleo y sus derivados para la exportación. El gas es igualmente abundante pero difícil de aprovechar si no se consume internamente. Con ese objetivo, Pdvs asignó 1850 millones de dólares al desarrollo un parque industrial del rubro. Las fábricas mixtas de kits y compresores a integrar con socios argentinos privados reservarán a la petrolera el 51 por ciento en todos los casos y, en algunos, ésta será la única aportante de capital. El programa oficial prevé que ese país regalará los equipos de gas a los automovilistas venezolanos, que comprarán el GNC por un valor casi simbólico.

Otro beneficiario de este amplio programa es Claudio Cirigliano, dueño del Grupo Plaza y operador de Trenes de Buenos Aires. Tatsa (Tecnolo-

gía Avanzada de Transporte Sociedad Anónima), su fábrica de carrocería radicada en San Martín, está preparando un prototipo de colectivo propulsado a gas que, de conquistar el aval venezolano, activará un programa de fabricación de 1000 unidades para aquel mercado.

Tampoco se quedan atrás los constructores. Aldo Roggio viajó con Kirchner en representación de la Cámara Argentina de la Construcción junto a otros socios como Iecsa (grupo Macri), Homa, Cartellone, Pescarmona y Electroingeniería, flamante socia de Enarsa para Transener. Este renglón de la movida patronal se fundó en el afán de analizar cómo sumarse al plan venezolano de construir 180 mil viviendas sociales por año y subsanar un déficit de 2,5 millones de casas. El Instituto Social de Venezuela tiene el presupuesto pero no la tecnología ni la capacidad de gerenciarla y ahí tallan las firmas locales. El otro gran anzuelo es el amplio programa de infraestructura, al que algunos locales consiguieron sumarse disputándoles el negocio a otras firmas, como la brasileña Oberdrech o la italiana Impregilo.

El conocimiento local es a los venezolanos tan atractivo como para los argentinos su subsuelo pródigo en hidrocarburos. En esta creciente venta de tecnología también interviene activamente el Estado, a través de empresas como Invap, que provee hardware para usos medicinales, y organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria o el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El INTA hizo punta con un asesoramiento para mejorar los rindes agrarios que complementará al de Los Grobo. Entre otros aportes, el INTI auxiliará a Chávez a desarrollar la industria metalúrgica aguas abajo para aprovechar allí mismo el acero que produce Sidor, de Techint, argentina pionera en este desembarco en tierra de Chávez.



Hugo Chávez, presidente de Venezuela, es un imán con sus petrodólares para muchas empresas argentinas.

ASOCIACION ENARSA-PDVSA Y LOS NEGOCIOS DE TECHINT

Petróleo y acero

POR C.C.

Venezuela no sólo es para la Argentina una buena alternativa para ampliar la frontera de los negocios privados sino, básicamente, el reaseguro de conseguir combustible en la cantidad y momento que lo precise, eso sí, a riguroso precio de mercado. Otra buena chance, quizá más contundente, es la incipiente apertura de la riquísima Faja del Orinoco a la estatal Enarsa que, a pesar de la escasez de capital para explotar el subsuelo argentino, está a punto de trasnacionalizarse de la mano de Pdvsa. Los detalles de esta comunión

entre las dos empresas estatales aún no están definidos, pero hay dos cuestiones fuera de duda: que la administración de Hugo Chávez formalizó el convite y que cualquier emprendimiento en la Faja entrañará muchos cientos de millones de dólares de inversión.

Procesar el petróleo extra pesado venezolano implicaría también la construcción de una refinería cuyo valor supera los 2 mil millones de dólares. Montos difíciles para Enarsa, cuyo principal capital hoy es un intangible, como el derecho para explorar y explotar áreas *offshore* en la costa argentina. Conociendo esa res-

tricción, algunas petroleras privadas que operan en el mercado local ya le acercaron a Julio De Vido la idea de asociarse a la empresa pública para aportar dinero.

La asociación es una fórmula recurrente a la que apela Pdvsa para el área de hidrocarburos, ahora con el fin de que el Estado gane participación en ese rubro vital para su economía.

Bajo la amenaza cierta de tomar las plantas de producción, Chávez obligó a reconvertir un grupo de contratos de servicios con las petroleras privadas, que habían sido celebrados por anteriores gobiernos. La fórmula impuesta le da a Pdvsa la mayoría accionaria, con el 60 por ciento. A cambio, sus socios tienen un acuerdo por más plazo que el original y pueden disponer libremente del 40 por ciento del crudo que produzcan. Casi todas aceptaron las nuevas condiciones impuestas, salvo la norteamericana Exxon, que vendió su contrato; la italiana ENI, que acudió al Ciadi; y la francesa Total, cuyo campo fue tomado. Un proceso similar está comenzando en la Faja, zona a la que Enarsa fue invitada.

Estos vericuetos negociadores son bien conocidos por Techint, que a través de Tecpetrol opera varias áreas en Venezuela con contratos reconvertidos. El holding de la familia Rocca también conoce el paño a través de la acería Sidor, con la que el destino le dio oportunidad de un desquite. El grupo había construido esa planta en la década del '70, a través de un contrato de obra pública que, inflación mediante, le resultó un negocio pésimo. Años después, y privatización mediante, la trasnacional argentina se alzó con la planta como adjudicataria. A fines de 2006 se avino a la exigencia chavista de pagar muy por encima del valor de contrato el hierro que le compra a la estatal Ferrominera. Aun así, Paolo se muestra como un inversor entusiasta en Venezuela.

■ En cuatro años se triplicó el superávit comercial a favor de Argentina, que cada vez le vende más y más variados productos a Venezuela.

■ Ya se concretaron negocios como el salvataje financiero de SanCor o el renacer de Astilleros Río Santiago, que construye dos buques petroleros por 58 millones de dólares cada uno.

■ Se perfila como una destacada proveedora de tecnología al país caribeño para construir viviendas sociales, desarrollar la industria metalmecánica o para sembrar soja.

■ El plan para invertir 1850 millones de dólares en la industria del GNC habilitó la formación de empresas mixtas con socios argentinos.

■ Se entusiasman desde pymes hasta los exitosos de siempre, encabezados por Techint, Roggio, Cartellone, Pescarmona, Grobocopatel, Cirigliano y Macri.

■ Esta favorable perspectiva fue minando los prejuicios que muchos empresarios locales tienen respecto a la administración chavista.

■ La presunta hostilidad del mandatario venezolano hacia el capital privado no talla cuando se trata de celebrar millonarios contratos.

Empresarios seducidos por Hugo Chávez

CARLO EVI

Presidente de la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido y propietario de Tomasetto Achille



“Oportunidad excelente”
“Junto a otros dos fabricantes, nosotros ya firmamos con Pdvsa un preacuerdo para asociarnos en la producción de equipos para atender el plan oficial de reconvertir coches a GNC que tiene ese país. Tendremos el 49 por ciento y, en nuestro caso, no está previsto que aportemos capital. Pdvsa es un monstruo. Se trata de la cuarta petrolera del mundo y eso nos anima. Hasta ahora todos los compromisos en marcha con ella fueron cumplidos en tiempo y forma: son muy respetuosos de los plazos y los montos y la realidad es que nadie que tiene un pacto con ellos tiene de qué quejarse. Entre otros programas en funcionamiento está el de ingenieros y técnicos argentinos que están montando más de cincuenta talleres para la atención de las unidades de distinto porte. No vemos riesgo ninguno en estos emprendimientos. Ni siquiera cuando la firma argentina, además de proveer tecnología, tiene que invertir. En tal caso, hará lo mismo que en otro negocio: mirar cómo va a amortizar. Lo singular aquí es que existirá un solo cliente, el Estado venezolano, con voluntad de controlar los precios. Eso es lo que hay que definir en la letra fina de los acuerdos. Pero la oportunidad para nosotros es excelente y sin la intervención del gobierno argentino hubiera costado diez veces más.”

ENRIQUE WAGNER

Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción



“Es un ámbito amistoso”
“¿Cuál puede ser la singularidad de invertir en Venezuela? Ninguna. Tiene una legislación similar respecto del capital extranjero que el resto de los países de la región y la prueba de que es un ámbito igualmente amistoso lo da la cantidad de empresas trasnacionales que trabajan en Venezuela sin ningún problema. No me asusta la renegociación de contratos que (Hugo) Chávez encaró con las petroleras, porque ahí tiene otro margen de discrecionalidad: esas son concesiones que pueden prolongarse en el tiempo, mientras que lo nuestro simplemente serían contratos de ejecución de obra. Algunos podrían encararse solos. Otros, integrando consorcios con un partenaire local. Para nosotros siempre es bueno abrir nuevos mercados. Las constructoras argentinas ya están trabajando en Perú, Brasil, Chile y Ecuador y la apertura de Venezuela amplía ese escenario. Pescarmona ya llegó con un proyecto hidroenergético y Cartellone, con otro vial, por ejemplo. Además del plan de viviendas, Venezuela tiene un importante programa de infraestructura, por ahora monopolizado por empresas italianas, españolas y brasileñas. Nosotros estamos en excelentes condiciones para competir con ellas. Claro que todo es mucho más sencillo y fácil si existe el marco es un acuerdo país-país.”

Autonomía o dependencia

Por Marcelo Zlotogwiazda

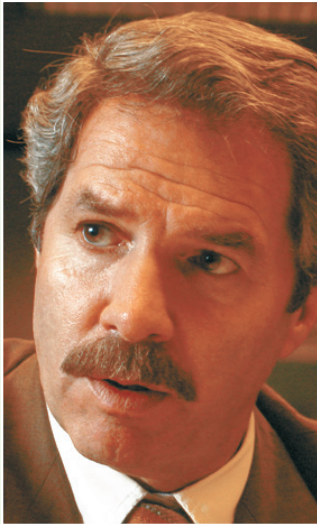
El conflicto con los docentes primero, con el resto de los empleados públicos ahora, y en general las complicaciones presupuestarias que está sufriendo la administración bonaerense empujaron a que el gobernador Felipe Solá volviese a despotricar contra lo que considera un injusto reparto de los impuestos que recauda la Nación y trajera del olvido uno de los desarreglos institucionales que arrastra el país desde hace largos años: la perimida y recauchutada Ley de Coparticipación Federal. Es una asignatura pendiente que viene desde antes de 1994 pero que en la nueva Constitución quedó plasmada como un imperativo. El artículo 75 ordena sancionar una Ley Convenio de Coparticipación, que para su concreción requiere que primero haya acuerdos de base entre todas las provincias y el gobierno federal, que luego sea aprobada en el Congreso por mayoría absoluta, y que después sea legitimada por las legislaturas de cada distrito. Es decir, se requiere un nivel de consenso muy pero muy difícil de construir en lo que es un juego de suma cero: cambiar las pautas de reparto implica que algunas provincias ganen a costa de otras, o que alternativamente las provincias sumen una porción cedida por la Nación. Es sencillo comprender por qué no se avanzó prácticamente nada. Más fácil aún si se considera que hay intereses que entre autonomía o dependencia se inclinan por la segunda.

Mientras tanto, la vieja ley fue sucesivamente emparchada, y se fue agudizando un mecanismo perverso que se aleja cada vez más de un objetivo federal. A medida que el gobierno central concentra cada vez mayor poder que ejerce con alguna discrecionalidad, las provincias relajan la política fiscal y retroalimentan la dependencia. Sobre esto último alcanza con tener en cuenta que las provincias que reciben asistencia específica para cubrir un gasto teóricamente descentralizado como es educación, ya son más de diez, entre las que figura nada menos que Buenos Aires.

Respecto del ancestral comportamiento de los gobiernos provinciales, que descuidan la tributación local y mercadean políticamente la asistencia del gobierno central, las evidencias van desde lo macro hasta lo ridículo. En un reciente informe sobre “La situación fiscal y financiera de las provincias para 2007”, el Instituto de Estudios y Formación de la CTA elaboró un cuadro sobre el grado de autonomía fiscal de cada provincia, medida como la proporción de los tributos que recauda sobre los ingresos totales: sólo la ciudad de Buenos Aires (83 por ciento) y la provincia de Buenos Aires (48) logran una autonomía superior a un tercio considerando sólo impuestos, a las que se agregan Neuquén (68) Chubut (58) y Santa Cruz (50 por ciento), si además de los impuestos se cuentan las regalías. Todas las restantes dependen de la coparticipación y de otras transferencias en más de un 70 por ciento, y hay siete (Corrientes, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Formosa) que no llegan ni al 10 por ciento de autofinanciamiento.

Por supuesto que es de esperar que a mayor pobreza y subdesarrollo el grado de autonomía decrezca y se requiera de las compensaciones que debería contemplar cualquier esquema de coparticipación federal. Pero también es cierto que el nivel de atraso potencia la indisciplina recaudatoria. Como ejemplo grotesco, en Santiago del Estero se cobraron en todo el año pasado 17 millones de pesos de impuesto inmobiliario y 6 millones de patente automotor. Claro que allí no hay Puerto Madero, ni proliferación de countries y barrios privados, ni demasiados autos de lujo, pero hay propiedades urbanas, rurales y autos suficientes como para que esas cifras queden en ridículo por partida doble: por las magnitudes en sí, y porque lo que queda fuera de la bolsa son en su inmensa mayoría recursos de las franjas acomodadas de las provincias.

La asignatura pendiente de la coparticipación que en los últimos años quedó postergada por la urgencia de la crisis y luego por la holgura presupuestaria generalizada, ahora retoma visibilidad porque después de mucho tiempo aparece como amenaza fiscal en el horizonte un deterioro de las cuentas provinciales, que por ahora no es grave pero requiere atención. En ese marco, el déficit esperado por la provincia de Buenos Aires es el más grande, aunque no el único, ya que también calculan cerrar en rojo Neuquén y Santa Cruz, y muy cerca de caer en ese desequilibrio algunas otras jurisdicciones como, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Pero dado que las mismas razones políticas y de otro tipo que explican por qué no se avanzó nada hasta ahora siguen vigentes, no queda sino descartar que el remedio al asunto pase por una nueva ley. ■



Polémica indec

■ “El Indec está empleando una nueva metodología que no se compadece con las mejores prácticas estadísticas en la materia.”

■ “Se han sustituido los precios reales relevados por los encuestadores por precios oficiales.”

■ “Las políticas de precios administrados son plenamente aceptables. Más aún, cabe destacar que la política antiinflacionaria ha sido exitosa.”

■ “Se han empañado injustificadamente los éxitos del Gobierno, a la vez que al ocultar la inflación real priva a la política económica de una importante fuente de información.”

LOS CAMBIOS EN LA MEDICION DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

“¿Qué hacer ahora?”

POR JUAN CARLOS DEL BELLO *

Para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Indec está empleando una nueva metodología que no se compadece con las mejores prácticas estadísticas en la materia. Se han sustituido los precios reales relevados por los encuestadores, por precios oficiales. La nueva metodología de cálculo del IPC subestima la inflación real. Pronto conoceremos además del “IPC oficial” o “IPC administrado”, los “IPC paralelos” (como en otras épocas teníamos el dólar oficial y el dólar paralelo), privatizándose de hecho un servicio público como es la información estadística, simplemente por la torpeza cometida de intervenir la medición del IPC en el Indec, afectando la credibilidad pública del organismo.

Las políticas de precios administrados son plenamente aceptables. Más aún, cabe destacar que la política antiinflacionaria ha sido exitosa en un contexto de las altas tasas de crecimiento económico, mejora de la distribución del ingreso y del empleo, y del acelerado ritmo en que se han alcanzado estos logros. Y lo ha sido por la combinación de políticas “heterodoxas”: política monetaria de manejo de la demanda agregada y superávit fiscal, retenciones a las exportaciones de alimentos para amortiguar el impacto de los altos precios internacionales en el consumo interno y acuerdos de precios, entre otras.

No obstante, la crítica apunta a esa errónea decisión de “administrar el IPC”. Lo sucedido empaña injustificadamente los éxitos de la política económica del Gobierno, a la vez que al ocultar la inflación real priva a la política económica de una importante fuente de información para monitorear y mejorar la política antiinflacionaria en momentos de marcados deslizamientos de precios. Por ejemplo, para diseñar y poner en marcha incentivos que amplíen la competencia



“Es común la tensión entre el instituto de estadísticas y los gobiernos”, afirma Del Bello.

Un ex director del Indec propone dar marcha atrás en la intervención del Indec y constituir un comité de expertos para recuperar la credibilidad del organismo.

en mercados determinados, para incrementar las inversiones que aumenten la oferta de bienes y servicios, para que los acuerdos de precios formen parte de la mejora de la competitividad y productividad sectorial, para atenuar el continuo crecimiento de la demanda agregada empujada quizás por un desmedido crecimiento de los créditos de consumo. Estos u otros instrumentos de política no se estarían considerando suficientemente por el espejismo de un IPC administrado.

Si algún sector del Gobierno tenía o tiene dudas sobre la medición del IPC, debería haber apelado a convocar a un comité de expertos para examinar todos los componentes que se toman en cuenta en la medición del IPC: representatividad de los precios y de los coeficientes de ponderación según las pautas actuales de consumo, confiabilidad de la muestra de negocios encuestados. Así es como se hace en el mundo. Cabe recordar el caso de las dudas que tuvo la Reserva Federal (banca central de EE.UU.) respecto del IPC de ese país hace unos 13 años. La Reserva Federal supuso que había una sobreestimación del IPC que impactaba negativamente en la política

monetaria y cambiaria. Constituyeron un comité de cuatro expertos (la Comisión Boskin) que demostró que la medición era correcta.

En todos los países es común la tensión entre el instituto de estadísticas y los gobiernos, porque las estadísticas dan lugar a buenas y malas noticias. Y como señala el experto Jacob Rayten, de Canadá, los gobiernos prefieren las buenas noticias y no las malas a las que se trata de disimular o no darles proyección. Las noticias son noticias y las oficinas de estadística no hacen distinción entre buenas y malas, ya que son instituciones regidas por un código de ética. El cargo de director de un instituto de estadística es un cargo político, pero muy particular, porque su primera misión es ser obediente a los principios fundamentales adoptados en las Naciones Unidas para hacer buenas estadísticas socioeconómicas: neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y credibilidad. Su misión no es ser obsecuente con el gobierno que lo designó. ¿Cuál es el riesgo?, perder el puesto. ¿Qué hacer ahora?, el presidente Kirchner siempre aconseja corregir el rumbo cuando se cometen errores. Ese es el desafío que tiene para con el Indec. ¿Cómo subsanar esta situación?, volviendo a la metodología de cálculo del IPC de diciembre 2006 y convocando a un Comité Internacional de Expertos (tipo Comisión Boskin) para que emita un juicio sobre la medición del IPC. Regularizando la situación de los cargos directivos del Indec convocando a concursos públicos sustanciados por tribunales integrados por profesionales intachables que incluya expertos del exterior. El Indec goza de reconocimiento internacional y como toda institución pública debe ser sometida a procesos de mejoramiento continuo, que es lo contrario a lo que ha ocurrido en la institución desde principios de 2007. ■

* Ex director del Indec.

Chau a las garrafas

POR NATALIA ARUGUETE

Cuartel V, una de las localidades más pobres y alejadas de la comunidad de Moreno, creció aceleradamente en los últimos años, arrastrando importantes deficiencias en la prestación de los servicios públicos como agua, electricidad y gas. Luego de una investigación social, económica y técnica de tres años, la mutual de transporte El Colmenar y la Fundación Pro Vivienda Social junto a los vecinos, definieron que la necesidad prioritaria de la comunidad era contar con gas natural, ya que representaría un cambio radical en la calidad de vida y un significativo ahorro frente al costo de la garrafa de gas envasado. A partir de ese diagnóstico, más de cuarenta organizaciones sociales realizan desde hace casi cinco años una obra de extensión de la red de gas natural, tarea que históricamente ha quedado en manos del Estado o de empresas privadas.

En septiembre de 2001 se creó la cooperativa Comunidad Organizada, una red integrada por El Colmenar, Pro Vivienda Social y entidades de los barrios de Moreno. Este espacio asumió las acciones de promoción y difusión del proyecto “Obra Pública con gestión social”, encargado del tendido de la red de gas. El objetivo de Comunidad Organizada era abaratar los costos de la inversión y facilitar así el acceso de la población al servicio. Para que cerraran las cuentas era indispensable que siete de cada diez familias aceptaran conectarse a la red y firmaran el contrato de adhesión al fideicomiso, creado para llevar a cabo la gestión del proyecto y otorgar los créditos a las familias que debían pagar la conexión. Con ese nivel de adhesión, el costo de las obras –gastos materiales, administrativos, de promoción, de personal y even-

El objetivo de Comunidad Organizada fue abaratar los costos de la inversión y facilitar el acceso de la población al servicio básico de gas. Proyecto para mejorar la calidad de vida.



Fideicomiso para la gestión del proyecto y créditos a las familias para pagar la conexión.

tuales riesgos—estaba estimado en 844 pesos por hogar, a pagar en un máximo de 120 meses.

Tradicionalmente, el costo de las redes se deduce de hipótesis de conexiones futuras, a partir de una estimación de rédito comercial. Las empresas y los municipios suelen calcular un máximo de 40 por ciento de futuros conectados. Esta ecuación hace que el valor de la conexión por usuario sea muy elevado. Por ejem-

plo, seis años antes en José C. Paz, la red externa llegó a cuatro por cada diez familias y le costó 1500 pesos a cada una. Además, con esta dinámica todas las casas por donde pase la cañería externa están obligadas a pagar la conexión, prendando de deuda al lote.

Según el proyecto de Cuartel V, en cambio, sólo se endeudan aquellos que firman el contrato de adhesión para conectarse a la red y el crédito

que otorga el fideicomiso es personal y no pone el lote como garantía. De esta forma, el plazo de devolución de los créditos se fue estabilizando en un promedio de 48 meses y muchas familias ya cancelaron sus deudas. Al principio, conseguir la conformidad de la población fue difícil, por la poca credibilidad de los vecinos. “Las obras públicas suelen traer mucha desconfianza”, opinó ante Cash Silvia Ebis, del Colmenar. Pero con el tiempo, se logró la participación activa de la población en la discusión de los planes y precios de la red, en el control del fideicomiso y en la elección de la empresa constructora y de los vecinos que trabajarían en las obras. El otro obstáculo vino del municipio, que se opuso a invertir en las obras e impuso muchas condiciones para aprobar el proyecto. “El apoyo del Municipio al proyecto llegó una vez avanzadas las obras”, contó a Cash Luly Avellaneda, presidenta de Comunidad Organizada.

Después de sortear tantos escollos, en 2003 lograron comenzar el tendido de la red en los primeros cinco barrios de Cuartel V, a partir de un préstamo del Banco Mundial de 250 mil dólares y otro del Foncap (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social) de tres millones de pesos. Dos años más tarde, 2500 hogares accedieron al gas natural. Y para fines de este año, se pretende incorporar a otras 2000 familias. En Comunidad Organizada hacen el siguiente cálculo. Una familia gastaba como mínimo unos 60 pesos por el gas envasado, hoy paga menos de siete pesos, es decir, un ahorro anual de 600 pesos. “Si lo multiplicamos por 2000 familias, son 1.200.000 pesos”, estimó Ebis. Y si se suman panaderías, casas de comidas y otros comercios que usan gas para sus emprendimientos, el ahorro es mayor a dos millones de pesos por año. [C](#)

Cooperativas gestión

■ La necesidad prioritaria de la comunidad era contar con gas natural, ya que representaría un cambio radical en la calidad de vida.

■ Además, implicaría un significativo ahorro frente al costo de la garrafa de gas envasado.

■ “Más de cuarenta organizaciones sociales realizan desde hace casi cinco años una obra de extensión de la red de gas natural.”

■ Se logró la participación activa de la población en la discusión de los planes y precios de la red, y en la elección de la empresa constructora.

■ “Ya 2500 hogares accedieron al gas natural. Y para fines de este año se pretende incorporar a otras 2000 familias.”

■ “Una familia gastaba como mínimo unos 60 pesos por el gas envasado, hoy paga menos de siete pesos, es decir, un ahorro anual de 600 pesos.”

EL BAUL DE MANUEL Por M. Fernández López

Mil pesos pago

“Pagaría 1000 pesos por ver ese partido”, dicen que dijo el DT de los cuervos. O lo que es igual: “Pagaría por *no perder* de ver ese partido”. Los economistas clásicos aceptaban que la valuación de un bien fuera arbitraria, pero sólo cuando tal bien fuera no reproducible —“escaso”— y su precio no fuera sino un reflejo de los gustos y caprichos del comprador, como aquellos cuadros que se venden carísimos en remates. Ahora bien, el atributo necesario de todo bien económico es su *escasez*, ya sea *absoluta* —como el retrato de la Gioconda— o *producida* por un régimen distributivo que confiere a cada uno un mayor o menor acceso a los bienes. Cuanto menor el ingreso personal, mayor la “escasez” de bienes económicos posibles para cada cual, y mayor la necesidad de limitar su demanda a los bienes más necesarios. Por la misma razón, una caída brusca de los ingresos familiares —como la ocurrida en 2002— obliga a gran parte de la sociedad a reducir su consumo, y a reemplazar por bienes de calidad inferior aquellos otros que habitualmente consumía. El pago de impuestos o la cancelación de deudas producen el mismo efecto de reducción en el nivel o la calidad de vida. De ahí la resistencia al pago de

impuestos o el hábito de ser malos pagadores. En particular, cualquier compra o pago de dinero reduce en igual medida el restante ingreso individual. En personas muy ricas, tal pago de dinero no tiene por qué provocar una reducción de sus consumos, pero en personas pobres (en la Argentina, casi un tercio de su población), que gastan la totalidad de su ingreso en consumo, cualquier pago adicional o extraordinario supone el recorte de alguno de los consumos menos imprescindibles. Cualquier pago o gasto, en la medida en que supone recortar algunas compras, tiene como contrapartida la satisfacción o utilidad perdidas y que hubieran proporcionado los bienes a los que se renuncia. De un consumidor racional se supone que acepta perder cierta satisfacción o utilidad si con determinado gasto gana una satisfacción o utilidad similar. De donde resulta que la máxima suma de dinero que una persona está dispuesta a pagar por no privarse de consumir cierto bien, está en relación directa con la cantidad de satisfacción o utilidad que gana con ese consumo. Marshall expresó esta relación diciendo que “el precio de demanda de un bien corresponde a la utilidad marginal que proporciona dicho bien al individuo”. [C](#)

Crecen las aguas

El problema con el agua es su carácter dual, el ser indispensable para la vida y a la vez, tanto si escasea como si sobrea-bunda, la fuente de graves trastornos de la vida humana, animal y vegetal. En condiciones “normales” es alimento, medio de transporte y fuente de energía. En otras condiciones, todo se trastorna. La actual crecida del Paraná, con su secuela de viviendas bajo el agua, evacuados y de pérdida de miles de cabezas de ganado, la extensa zona que abarca el fenómeno y el constatar que no es un fenómeno aislado en el tiempo sino recurrente, llevan a comparar el caso con otros parecidos. Desde la remota antigüedad, Mesopotamia y Egipto, con sus ríos Tigris, Eufrates y Nilo, registraban este tipo de desastres. Pero el caso moderno más espectacular, y el que impactó más en la vida de una nación, fue el de la cuenca del río Tennessee, cuyas inundaciones afectaban a los estados de Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi y Louisiana (en total, 30 mil millas cuadradas inundables). Estos Unidos, a fines de 1932, ya llevaba tres años largos de recesión económica y amplio desempleo. Harto de las pseudo soluciones de mercado de los republicanos, votó masiva-

mente al demócrata Franklin D. Roosevelt, partidario de la acción estatal directa. En su primer año creó la TVA (Autoridad del Valle del Tennessee), empresa multipropósito, dedicada a construir y operar represas, plantas hidroeléctricas y obras de control de inundaciones a lo largo del valle del Tennessee. El plan abarcó otros aspectos, como la construcción de grandes autopistas. El emprendimiento no fue una panacea, y en 1937 volvió a ocurrir una recesión menor, pero puso firmemente en marcha la economía norteamericana, y el presidente Roosevelt fue reelecto por otros tres períodos. No hace mucho, Carlos S. Menem, que quería ser reelecto, ante una inundación parecida anunció la construcción de una gran muralla en la ribera del Paraná, pero nunca cumplió. Hoy, los argentinos ya no creen en palabras y la región de referencia continúa con problemas de inundaciones y mal estado de sus rutas, y el país con insuficiencia energética y amplia pobreza y desempleo. Los políticos que ya están, y aquellos que pretenden llegar a estar, tienen en este caso histórico un espejo donde reflejarse y, en caso de ejecutar una obra semejante, legitimar sus pretensiones de conducir el país. [C](#)

Pesos versus dólares

■ El **Banco Provincia** logró 243 presolicitudes de créditos por un monto de 37 millones de pesos en la última ExpoAgro 2007.

■ **General Mills Argentina**, filial local de la corporación estadounidense, invertirá 10 millones de dólares para la construcción de la planta de las barras de granola "Nature Valley".

■ El **Banco Ciudad** brindará el 20 por ciento de reintegro para compras de libros, artículos de librería y papelería realizadas en comercios del rubro con la tarjeta de débito Moderban.

■ **Banco Macro** y la provincia de Misiones suscribieron un acuerdo de asistencia crediticia por 10 millones de pesos a una tasa nominal anual del 12 por ciento, a 48 meses de plazo.

■ El resultado consolidado del último ejercicio de **Siderar** mostró una ganancia de 1342 millones de pesos, superior a los 1191 millones obtenidos durante el 2005.

■ **Farmacy** sumará 10 locales a los 87 que ya cuenta. Siete de las nuevas farmacias se instalarán en la Capital y las restantes tres en las provincias de San Luis y Córdoba.

POR CLAUDIO ZLOTNIK

Uno de los legados que dejó la década del '90 es que una economía no puede basarse en el endeudamiento. La quiebra de 2001 marcó a fuego esa enseñanza. Como así también que, a la hora de buscar financiamiento, una mejor opción es hacerlo en pesos evitando las monedas duras. La última reestructuración de la deuda fue un ejemplo: el 41 por ciento de la deuda pública quedó nominada en pesos. ¿Sería lógico que el Gobierno piense entonces en un nuevo canje con el objetivo de rescatar los bonos indexados en pesos? O ¿será la mejor alternativa que todos los nuevos títulos que se emitan sean en dólares?

A Néstor Kirchner no le gusta tener deuda indexada. Cabe recordar que el ciento por ciento de los papeles en pesos se encuentran atados a la inflación. Como el tipo de cambio permanece quieto, esa regla le está produciendo un costo que al Gobierno le parece exagerado. Cada punto de inflación le cuesta al Estado alrededor de 1680 millones de pesos anuales.

¿Qué pasaría si Economía decidiera realizar un canje? Una colocación de títulos en pesos a dos o tres años de plazo tendría una tasa de interés fija de entre 11 y el 13 por ciento anual, de acuerdo con la experiencia del Banco Central. Una emisión en dólares costaría algunos puntos menos, alrededor de 7,0 a 7,5 por ciento anual, de acuerdo con la estimación que realizan en algunas consultoras.

El Ministerio de Economía estudia canjear deuda en pesos indexados y colocar bonos en dólares. La experiencia de la década pasada enseñó que la dolarización restó autonomía a la gestión económica.

Pablo Piovano



Los operadores contabilizan sin estresarse ganancias crecientes con los títulos públicos.

Es más difícil saber cuál sería el resultado de un canje de más largo plazo. En el mercado, un bono Discount en pesos, con vencimiento en 2035, muestra un rendimiento del 5,85 por ciento anual en términos reales. En la city estiman que, de encontrar nuevo financiamiento en dólares a 28 años, el costo sería un par de puntos más barato.

Desde que se terminó el canje, el Gobierno prefirió cubrir los baches financieros con emisiones dolariza-

das. Por colocaciones a cinco y siete años viene pagando de 7,7 al 8,0 por ciento anual. Este año todavía faltan cubrir alrededor de 2500 millones de dólares. Y otros 9100 millones harán falta durante 2008. ¿Qué convendría hacer? Algunas consideraciones:

■ Durante los '90 quedó en claro que es más beneficioso evitar los descalces de monedas. Lo mejor es endeudarse en pesos ya que el Estado les cobra a los contribuyentes en esa moneda.

■ A una economía le sirve contar con referencias de instrumentos en pesos. Armar una "curva de rendimientos" les permite a los bancos y a los inversores tener una muestra en donde observar las tasas para poder prestar.

■ También es cierto que, aunque se lo propusiera, a Economía le resultaría muy dificultoso cambiar papeles en pesos por los dolarizados. Los financistas prefieren los bonos en pesos. Les rinden más, en un contexto donde no se prevé una devaluación del tipo de cambio. Más bien, los operadores especulan con un leve deslizamiento hacia abajo del dólar, aunque sea durante la época de la cosecha gruesa.

■ Al Gobierno se le aproximan vencimientos en dólares. En agosto, unos 3500 millones de los Boden 2012, a lo que deben sumarse unos 500 millones por el mayor crecimiento al esperado y otros 350 millones de compra de títulos por la capacidad de pago excedente, una exigencia incluida en el prospecto de canje.

En concreto, no sea que por tener una mirada de cortísimo plazo se cometan errores parecidos a los criticados años pasados.

ME JUEGO

JORGE MORGENSTERN

analista de MVAS Macroeconomía

Contexto I. La Reserva Federal (banca central estadounidense) confirmó que la economía sigue muy débil y que la inflación continúa siendo la preocupación central de Ben Bernanke.

Contexto II. Es positivo que Estados Unidos baje la tasa. No creo que veamos un desplome en el precio de los commodities. La demanda de materias primas no depende sólo de la suerte de Estados Unidos.

Bonos. Hay espacio para que continúen las subas. Las cuentas públicas de la Argentina son muy alentadoras para los inversores. Ese panorama no exime al mercado de futuras volatilidades. Esta semana sería un buen momento para el Gobierno para testear el mercado de deuda.

Dólar. Es posible que baje algunos centavos en las próximas semanas ante el fuerte ingreso de divisas por parte de los exportadores.

Recomendación. La diversificación en monedas puede resultar un buen negocio. Por ejemplo, comprar euros y yenes, dado el contexto de posible baja de tasas en los Estados Unidos. En cuanto a los títulos, me gustan las Nobac del Banco Central.

ACCIONES	PRECIO (\$)		VARIACION (%)		
	Viernes 16/03	Viernes 23/03	Semanal	Mensual	Anual
ACINDAR	4,160	4,160	0,0	-1,9	-13,7
SIDERAR	20,500	20,900	2,0	1,0	-14,3
TENARIS	68,300	67,800	-0,7	-3,3	-8,4
BANCO FRANCES	11,100	13,050	17,6	10,0	35,9
GRUPO GALICIA	2,960	3,180	7,4	206,0	11,2
INDUPA	3,140	3,240	3,2	-1,2	-3,6
MOLINOS	3,610	3,960	9,7	4,8	-5,7
PETROBRAS ENERGIA	3,090	3,150	1,9	-1,6	-10,3
TELECOM	12,800	13,750	7,4	5,8	15,6
TGS	3,950	3,910	-1,0	-2,3	-6,7
INDICE Merval	1.997,640	2.085,510	4,4	0,9	-0,2
INDICE GENERAL	101.367,250	106.227,830	4,8	2,2	3,0

Fuente: Instituto Argentino de Mercado de Capitales.

Porvenir es crecer

Venga. Invierta en Tucumán.



GOBIERNO DE TUCUMÁN

La Cepal Buenos Aires acaba de presentar un análisis del circuito cárnico —y sus subcircuitos— que resulta particularmente interesante cuando se discute cómo se reparte la renta en su interior y cómo se forman los precios pagados por los consumidores. En particular, el trabajo es un “análisis de los mecanismos de formación de los precios en las cadenas de ganados y carnes vacunas”. La investigación, realizada por Roberto Bisang y Mercedes Campi, entre otros, fue expuesta en un seminario organizado esta semana por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esto es, en el contexto del lobby sectorial. Sin embargo, es interesante dejar de lado por un momento las prevenciones y considerar los contenidos.

Entre las ideas centrales se destacan:

■ No existe un mercado único ni de ganados ni de carnes y subproductos, sino una multiplicidad de circuitos de formación de precios conformados por una amplia diversidad de agentes económicos. Los diversos circuitos de precios operan con vasos comunicantes entre sí, lo que significa una elevada competencia.

■ La demanda final, tanto interna como externa, es la que establece las condiciones iniciales de precios en función de sus niveles de ingresos, gustos, sustitutos y otros argumentos. Las etapas anteriores reaccionan y condicionan parcialmente la demanda.

■ A partir de los precios finales, tanto de carne como de subproductos, se “construyen” los ingresos posibles de cada una de las etapas previas. En consecuencia, si existen etapas ineficientes se resiente el conjunto de la cadena.

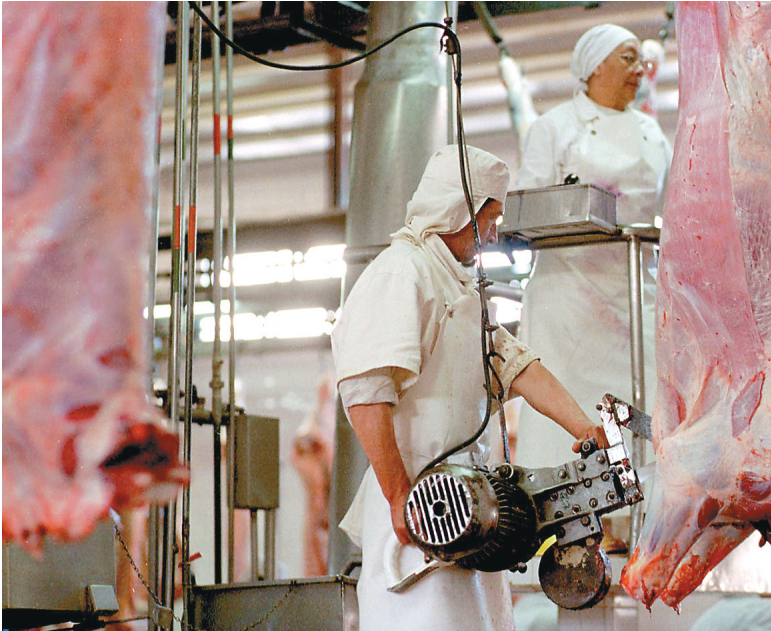
¿Cómo se arman estas conclusiones en las que el poder de mercado de los actores más fuertes parece inexistente?

Para responder la pregunta hay que desarmar la “cadena” o circuito.

La producción primaria de carne, la ganadería, se realiza en explotaciones de variado tamaño, dispersas a lo largo de distintas regiones del país y con tecnologías muy diferentes, desde la cría extensiva con invernada al engorde a corral (*feed lots*). Estos factores son los que determinan una oferta heterogénea y dispersa.

La dispersión y variedad también se repetiría en la “interfase comercial” producción primaria-industria, donde las modalidades de venta son abundantes. Las variantes extremas son, por un lado, los mercados concentradores como el de Liniers y los “remates-ferias” del interior, por donde canalizan su producción los productores pequeños y medianos. Y por otro las ventas directas, que son los acuerdos entre partes que realizan los grandes productores con supermercados y exportadores. En el medio está la actividad de diversos tipos de comisionistas, los que arman lotes, los de los frigoríficos y los independientes.

En cuanto a los frigoríficos, tampoco hay unidad y existen al menos seis tipos según tamaño, integración y mercados de destino. Ellos son: los que procesan producción propia (adquirida) y pueden venderla en todo el país (tránsito federal); los que con las mismas condiciones también faenan producción de terceros, es



"No existe un mercado único ni de ganados ni de carnes y subproductos", afirma la Cepal.

INFORME DE LA CEPAL SOBRE UN MERCADO SENSIBLE

El circuito de la carne

La investigación de la Cepal arriba a polémicas conclusiones sobre el peso de cada uno de los eslabones de la cadena de ganados y carne vacuna.

decir que también venden el servicio de faena y pagan o cobran, según el caso, por los subproductos del animal, como los cueros; los que sólo prestan servicios y los que no tiene tránsito federal, como los mataderos municipales. Por último se encuentran los que integran la producción primaria y la comercialización y, un escalón más arriba, los exportadores integrados.

En cuanto al reparto de la renta entre los actores descriptos, la estimación de Cepal en marzo de 2007

para el año 2005 es que el valor bruto del ganado bovino en pie destinado a faena fue de casi 12.000 millones de pesos, de los que el 16,6 por ciento se comercializó en los mercados concentradores, el 10,1 en los remates ferias y el 48,1 por ciento de manera directa. Lo que queda (25,2) se canalizó a través de consignatarios. Nótese que casi la mitad de la hacienda se comercializó en forma directa.

Hacia arriba a los 12 mil millones se les suman fletes y costos de comercialización de la hacienda en pie por cerca de 440 millones. Luego, el valor a salida del frigorífico fue de 14.260 millones, de los que 12.130 fueron carne y el resto subproductos. La carne se exportó por 3735 millones y se vendió al mercado interno por casi 13.915 millones. Las cifras globales permiten construir una torta de “distribución de valor de la cadena de ganados y carnes” en la que el 59 por ciento es para la producción primaria, 2 por ciento para la comercialización y fletes de hacienda, 10 por ciento para la transformación industrial y 29 para la comercialización final de carne.

Aunque casi el 30 por ciento para la comercialización parece mucho, las cifras no están mal, ya que el productor primario bordea el 60 por ciento, quedándose la transformación industrial con un magro 10 por ciento.

Restan algunos detalles: ver cómo se distribuye la renta al interior de cada uno de estos subsectores y, quizá lo más relevante en materia de poder de mercado, considerar el peso relativo de los integrados que participen de las cuatro porciones de la torta, pero esto último no se encuentra en el trabajo de Cepal.

* jaiusA@yahoo.com

agro

■ Las exportaciones de carnes frescas, procesadas y subproductos **aviares** alcanzaron en el primer bimestre del año las 19.954 toneladas por 23 millones de dólares.

■ La empresa Oil Fox anunció que fabricará biodiésel a partir de **aceite de algas marinas** para uso comercial. Con este objetivo, firmó un acuerdo con el gobierno de Chubut para “sembrar” algas marinas en piletas en esa provincia.

■ La producción de **amargos, bitters y fernets**, que representa el 27 por ciento del total de las bebidas, registró un crecimiento anual del 16 por ciento, informó la Secretaría de Agricultura.

INTERNACIONALES

LA CADENA STARBUCKS Y EL COLONIALISMO CAFETERO

Etiopía, café y McCartney

Por Marcelo Zlotogwiazda

Starbucks es la cadena de cafeterías más importante del mundo. Dispone de 9400 locales en Estados Unidos y cerca de 4000 en otros países, donde vende múltiples variedades de café para llevar a domicilio y atiende a millones de personas que disfrutan de ese y otros productos en sus confortables instalaciones. En 2006 facturó 7900 millones de dólares. En Etiopía viven 70 millones de personas que generan un Producto Bruto de 6900 millones de dólares por año, es decir, inferior a la facturación de Starbucks. Con un ingreso per cápita anual que no llega a los 100 dólares (el de la Argentina ronda los 5000 dólares), es uno de los países más pobres del mundo. Y, en alguna medida, esa situación deriva de lo poco que el país recibe por el apetecido café que se vende en Starbucks.

Etiopía está intentando mejorar la porción que recibe por cada kilo de su café que se consume fuera del país, y de esa manera contribuir a aliviar en algo la situación de los 15 millones de habitantes que dependen directamente de ese cultivo. Está embarcada en una campaña para registrar legalmente la marca de sus tres principales variedades (Harar, Sidamo y Yirgacheffe), pero se encuentra con la férrea oposición de Starbucks.

De cada dólar que Starbucks embolsa por el café etíope, al productor africano le queda nada más que un 5 por ciento, según los cálculos más conservadores. Para *The Wall Street Jour-*

nal la expoliación es aún mayor. En un reciente artículo titulado “Una disputa con Etiopía daña la imagen de Starbucks: ¿colonialismo cafetero?”, se afirma que en una cooperativa productora de la variedad Sidamo reciben 1,5 dólar por un kilo que luego de procesado en Starbucks puede llegar a venderse a más de 50 dólares.

Para emparejar un poco esa lucha desigual que ya lleva casi un año, los etíopes han conquistado el apoyo de varias organizaciones no gubernamentales de peso, como CoopAmerica u Oxfam, que lanzaron una campaña para que Starbucks acepte el patentamiento del café etíope. Además de otras actividades que llevan re-



Starbucks no quiere pagar más por el café de Etiopía.

alizadas, el pasado jueves Oxfam aprovechó la asamblea anual de accionistas de Starbucks en su sede de Seattle, en el estado de Washington, para presionar con avisos en los diarios, afiches en las calles y muestras de fotografías.

En una de las solicitadas justifican su apoyo a la pretensión etíope con un argumento esencialmente capitalista: “El derecho a la propiedad intelectual explica una porción importante del valor total del comercio mundial, pero los países ricos y las grandes compañías capturan la mayor parte de ese valor. Etiopía, el lugar de nacimiento del café y uno de los países más pobres del mundo, está intentando obtener lo que le corresponde y valorizar su producción, y por eso debe ser ayudada”.

Por el momento Starbucks se mantiene firme, y en lo que puede interpretarse como una estrategia para neutralizar cualquier deterioro en su imagen acaba de realizar una jugada que sacudió el negocio discográfico, un rubro al que se diversificaron hace no mucho en alianza con la empresa Concord Music. Desde hace un tiempo en las cafeterías de la cadena se venden producciones discográficas exclusivas con intérpretes de primer nivel como Ray Charles, Bob Dylan o Norah Jones. Y hace un par de semanas consiguieron nada menos que el pase de Paul McCartney, el ex beatle que a lo largo de toda su carrera fue un artista de EMI. Alguno tal vez recuerde que McCartney, lo mismo que John Lennon, se negó en 1971 a participar del benéfico Concierto para Bangladesh que organizó George Harrison. [C](#)

FACTURA DIGITAL

Estimados amigos, se sabe que algunas empresas están incorporando como forma de pago de sus servicios la factura digital. Esto trae aparejado ciertas dificultades. Esas empresas no tienen en cuenta que no todos tienen Internet, no todos tienen impresora en sus hogares, no todos los que tienen el servicio de telefonía celular (por ejemplo) tienen correo electrónico. Hay que pensar en las personas mayores que ni siquiera saben qué es un ciber y así y todo tienen teléfonos celulares para comunicarse con su familia. Las empresas que ofrecen servicios deberían lograr la comodidad del cliente, somos nosotros los que pagamos y tenemos derecho a elegir cuál es la forma más cómoda de pago según nuestro tipo de vida. No es posible que la empresa nos obligue a tener correo electrónico para obtener el servicio, no es posible que tengamos que pagar la impresión de nuestras boletas para pagar el servicio. ¿Qué clase de servicio es ése?

Por otro lado, si lo avalamos, estamos trabajando para una sociedad donde se siguen viendo favorecidos los que más tienen, no pensamos en los que no tienen ni los recursos ni las posibilidades por la edad u otro tipo de dificultad. Que la factura digital sea una opción. Hay que hacer saber a la empresa que le otorga el servicio que quiere recibir la factura en su domicilio. Haga escuchar su voz. Trabajemos para una sociedad donde las posibilidades sean para todos iguales.

Helena Fernández

nemesishln@hotmail.com

IMPUESTO

Desearía que investiguen lo que detallo, ya que me está afectando en forma particular, y no sólo a mí, sino a una cadena de seis propietarios que simplemente desean mudarse. Mi vendedor es una pareja mayor a la que debo asesorar personalmente, mediante innumerables llamados diarios, ya que nadie los contiene. Desde el 1º de noviembre, una nueva complicación ha surgido a la hora de mudarse. Un engorroso trámite ante la AFIP relacionado con obtener un Certificado de No Retención ante el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles. Dicho trámite debe ser realizado por los propietarios sin considerar edad, estudios, situación emocional. Ni las inmobiliarias ni los escribanos incluyen en sus abultados honorarios dicho servicio, ya que lo desconocen. El trámite demanda, como mínimo, 20 días de antelación a la fecha de escritura, y cada uno de la extensa cadena de compradores y vendedores depende de los datos que, a su vez, le debe dar su comprador, lo cual suma incertidumbre a la ya complicada tarea de cambiar de vivienda. Además, por supuesto, cada agencia de la AFIP brinda diferentes respuestas y/o soluciones ante una misma situación. ¿Quién realiza el trámite si es un bien ganancial? ¿El marido, ambos, es indistinto? ¿Qué ocurre si al momento de realizar la escritura traslativa de dominio no está publicado el Certificado de No Retención en la página de la AFIP? ¿Se castiga al vendedor, por ejemplo si no lo está porque su comprador no dio en tiempo y forma los datos del escribano actuante, porque a su vez depende de un crédito hipotecario, cuyo banco no tiene en consideración los plazos antes mencionados? Quien ha legislado este tema no tuvo en consideración cómo está afectando la vida diaria, de familias con hijos, de gente mayor, de personas que tienen total desconocimiento impositivo y que deben convertirse en emi-nencias de la noche a la mañana.

Raquel Liliana Milner

rmilner1@cponline.org.ar

BUENA MONEDA

Sintonía fina

Por Alfredo Zaiat

A l igual que con las estadísticas de desocupación, con las de pobreza e indigencia, se debe empezar a realizar un análisis más fino que las brutas cifras globales. Esa posibilidad viene ofrecida por el importante descenso de esas tasas clave para evaluar la realidad sociolaboral. El desempleo en 8,7 por ciento y con Planes Jefes cercano al 10 por ciento, con tendencia a seguir bajando por el acelerado crecimiento económico, ubicará a ese indicador en valores “tolerables” socialmente. El estudio del mercado laboral por tasa de desocupación seguirá siendo relevante, pero habrá que prestar más atención sobre la calidad y las condiciones laborales, además de los niveles de ingresos. Hoy, debido al bienvenido ritmo de creación de puestos de trabajo, la cuestión principal pasa por la obscena informalidad que alcanza al 43 por ciento de la fuerza laboral. Esto implica desprotección social para el trabajador, por la carencia de cobertura médica y aportes para una jubilación futura. Como un motor de una sociedad es el reclamo para superarse, la mirada empezará a posarse sobre el empleo en negro para que políticas públicas particulares se hagan cargo de ese problema. Con las cifras de pobreza e indigencia pasará lo mismo, aunque todavía no han alcanzado esos rangos de “tolerancia” pese al fuerte retroceso que se ha verificado en la última medición.

De todos modos, resulta interesante precisar esos números fríos de la exclusión aproximándose al interior del universo de la población en condiciones de pobreza e indigencia. Las bases para ubicar esos indicadores sociales en magnitudes previas a la crisis tienen que ver con: 1. Fuerte crecimiento económico. 2. Suba del salario mínimo a 800 pesos, que antes de las elecciones se elevaría a 1000. 3. Alza del salario real de los trabajadores en relación de dependencia con el ajuste promedio del 19 por ciento en 2006, comportamiento que se repetiría este año con un acuerdo sindicatos-empresas del 15 por ciento. 4. Arrastre del ingreso del trabajador en

negro por esos ajustes, que implicó una mejora del 20 por ciento el año pasado, según el Indec. 5. La moratoria previsional que incorporó a un millón de ancianos al sistema, que antes no recibían nada y ahora cobran unos cientos de pesos. 6. Recomposición de la jubilación mínima. 7. Los acuerdos de precios en productos de la canasta básica que contuvieron el alza de alimentos y bebidas.

Ahora bien, con esa estrategia oficial que continuará este año con elevada probabilidad de repetir resultados favorables, emergen algunas cuestiones interesantes. Una de ellas fue expuesta por el sociólogo Artemio López, en su blog *rambletamble*, al buscar una explicación a la caída de la pobreza teniendo en cuenta la calidad del empleo (elevada informalidad) y salarios (el promedio del trabajo en negro se ubica en 490 pesos, apenas 10 por ciento por sobre el valor de la línea de indigencia). La respuesta la encontró en las estadísticas de ingreso familiar total mensual del hogar: el salario principal –del jefe de la casa– es bajo pero es complementado por el ingreso familiar ampliado, debido a la suma de perceptores de remuneraciones (cónyuge e hijos) y eventuales changas. Esa adición de mensualidades por diferentes vías eleva el ingreso familiar total a 1520 pesos, según calcula López en base a datos del Indec. “La sostenida caída de los niveles de pobreza a indigencia por ingresos –explica López– está sostenida en una gran oferta de empleos de baja productividad, mala calidad y escaso salario, que logran, sin embargo, conformar un ingreso familiar total que triplica el salario del trabajador informal que ejerce la jefatura.” Para concluir que “esta dinámica de pluriempleo muy mal pago se refleja en la mejora de índices sociales relevantes y ofrece gobernabilidad al sistema”. La brecha entre tasa de desempleo (8,7 por ciento) y pobreza (26,9 por ciento) revela esa deficiencia, con un porcentaje importante de la población con trabajo pero con salarios de pobre.

Otro aspecto para comprender las recientes cifras de pobreza e indigencia se vincula a cómo se miden esas variables. Al margen de la

torpe intervención oficial en la elaboración del IPC, índice que sirve para valorar las canastas/líneas de pobreza e indigencia y, por lo tanto, esa relación estará subestimada en el primer semestre de este año, el economista de la CTA, Claudio Lozano, expone falencias de la metodología actual. Entre ellas, destaca que el patrón de consumo está desactualizado porque es de hace 20 años; que no hay canastas regionales; y que se aplica un coeficiente único para alcanzar la canasta básica total, lo que supone que no hay diferencias entre los requerimientos alimentarios y el resto de los bienes y servicios que pueden demandar los hogares. El Indec ya cuenta con una metodología actualizada, que no es aplicada, según Lozano. Con ella, la pobreza subiría alrededor de 8 puntos y la indigencia, 3. Esto no significa –aclara– la existencia de una tendencia declinante de esos indicadores, aunque con la nueva metodología sería más lenta.

Una cuestión también relevante se revela en lo que se denomina la brecha de pobreza. El presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Martín Lousteau, remarca cuando habla de la cuestión social que el crecimiento económico y las mejores condiciones para conseguir empleo han acercado a los pobres por ingresos a la puerta para dejar de serlo (unos 900 pesos, según el Indec). Esto implica que en el universo de los pobres, la masa de recursos disponible es mayor que en la década pasada aunque el indicador porcentual de pobreza fuese el mismo. Es decir, en los noventa, con desempleo y recesión, el umbral monetario para abandonar la categoría de excluido estaba más lejos. O sea, en términos relativos los pobres hoy están mejor que los pobres de ayer, aunque en términos absolutos son tantos en uno y en otro período.

De ahora en más, las cifras sociolaborales obligarán a un análisis más complejo que la exposición de los números brutos. Además, demandarán de sintonía fina en la política oficial, con énfasis en estrategias focalizadas y regionales, para avanzar tras el objetivo de inclusión social más que de obtener satisfechas estadísticas. [C](#)

